



Bajo el Volcán

ISSN: 8170-5642

bajoelvolcan.buap@gmail.com

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

México

Sosa Elízaga, Raquel

Por el bien de todos...

Bajo el Volcán, vol. 6, núm. 10, 2006, pp. 197-203

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Puebla, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28661020>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

POR EL BIEN DE TODOS...

Raquel Sosa Elízaga

A las luchas históricas del pueblo de México sólo pueden referirse con orgullo, sin vergüenza o desprecio, muy pocos de los actores políticos hoy presentes en el escenario nacional. La mayor parte de quienes se ostentan como representantes populares, servidores públicos o candidatos a serlo, se identifica, por el contrario, con los intereses del poder que ha impuesto, tantas veces a sangre y fuego o en contra de la mayoría, su propia perspectiva de lo aceptable y posible para todos y, desde luego, para ellos mismos.

Convertir las seculares demandas de justicia, libertad, igualdad, soberanía, equidad y diversidad en experiencia de gobierno frente a la entidad más compleja del país; ideas-fuerza y elemento movilizador principal de campaña; y guías para la formulación de un programa nacional, como ha hecho Andrés Manuel López Obrador, es un asunto que mueve a la reflexión, pero también un tremendo compromiso frente a quienes exigen, como en la historia de todos los movimientos de lucha democrática y de justicia, cumplimiento de la palabra empeñada.

Los planteamientos que siguen aspiran a aportar elementos críticos a quienes consideran que es urgente realizar transformaciones profundas en la sociedad, en las estructuras de poder y en el ejercicio del servicio público. La conformación de una mayoría dispuesta a la realización de dichas transformaciones es el principal reto que enfrenta la propuesta que presenta el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de la República.

EL ESTADO Y LOS DERECHOS SOCIALES:
DE LAS REVOLUCIONES AL NEOLIBERALISMO

La universalidad de los derechos sociales, expresada en nuestra Constitución y por la que han luchado generaciones de mexicanos, ha sido la demanda fundamental de nuestro pueblo en todos los momentos críticos de su historia. En contra suya argumentan ahora los neoliberales que, siendo servicios y, eventualmente bienes los que se entregan a la gente, bien pueden estar sometidos a las reglas del mercado y, en ese caso, quien pretenda tener acceso a ellos deberá pagar por conseguirlo.

Una visión semejante preside los actos del actual gobierno, para el que la salud, la educación, la vivienda sólo pueden ser parcial y temporalmente “subsidiados”, mientras quienes se benefician de ellos ingresan plenamente a la economía de mercado. Por una vía distinta, el partido que gobernó al país durante más de siete décadas llegó a la conclusión de que a la corrupción sólo puede frenársela clausurando las fuentes que la provocan, esto es, cerrando o reduciendo drásticamente las instituciones en las que se volvió práctica corriente (después de haberlas saqueado impunemente por años, desde luego). Una perspectiva así dio, de hecho, lugar a las apresuradas y fraudulentas privatizaciones de la mayor parte de las empresas estatales en el país durante los años setenta y ochenta. De hecho, durante la segunda mitad del siglo veinte, el partido oficial minó por su ineficacia, corrupción y deterioro a las instituciones que se crearon en cumplimiento del mandato constitucional de hacer efectivo el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la soberanía nacional. A partir de los años cuarenta del siglo pasado, en dichas instituciones no se escatimaron sueldos elevadísimos y prebendas a quienes las dirigieron, pero sí inversión, mantenimiento y la expansión necesaria para servir al crecimiento de demandas de la población. Así ocurrió que quienes crecimos en esos años nos acostumbramos a escuchar un discurso vacío, sin convicción y sin fundamento real sobre lo mucho que se hacía en beneficio de los cada vez más pobres (en número y en deterioro de sus condiciones de vida), al tiempo que constatábamos lo oneroso e ineficaz que parecía el cumplimiento de la responsabilidad social del Estado.

La combinación de enriquecimiento ilegal e ilegítimo de los funcionarios, el florecimiento del narcotráfico y la especulación financiera, el endeudamiento externo y el deterioro de las instituciones públicas hizo posible que en muchos prendiera la idea de que la única forma de lograr un cambio sería entregando a la supuestamente eficiente empresa privada lo que el gobierno no había sabido o querido mantener.

Así, se hizo posible que muchos políticos, hombres de poder y funcionarios conservadores comenzaran a plantear sin vergüenza que concebir a la política social como derecho era asunto de épocas pasadas, ajeno al Estado moderno y, en todo caso, amenaza para la estabilidad macroeconómica y para la determinación de políticas financieras orientadas a estimular la inversión privada, como lo imponen el movimiento internacional de capitales y las principales instituciones económicas del mundo.

El neoliberalismo, en efecto, fusionó en las últimas tres décadas razones y motivos para rechazar todo compromiso del Estado con la sociedad; propuso y practicó una política denominada de “corresponsabilidad”. Si se quería realmente que la sociedad creciera (objetivo distinto al del desarrollo, postulado durante la primera mitad del siglo), debía reducirse drásticamente el costo del gobierno. En cuanto a los programas sociales, los recursos debían proceder tanto del gobierno (aunque en menor medida), como de las empresas y de la sociedad. Este comenzó a ser el credo de la “ortodoxia neoliberal” que asumieron, como los de México, la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y de buena parte del mundo del Sur. Debía dejar de plantearse, para siempre, en cuanto responsabilidades del Estado, la política social como materia de derechos de la población. La principal tarea del Estado debía ser garantizar la seguridad y contener los desórdenes sociales.

La era de subsidios generalizados debía terminar. No más servicios gratuitos. No más entrega de recursos estatales “a cambio de nada”. La sociedad debía aprender a “valorar” lo que el gobierno podía ofrecerle (aunque fuera cada vez menos a cambio de crecientes impuestos y ostensibles privilegios para los funcionarios públicos y los empresarios) y pagar por lo que recibiera.

La idealización de las empresas y la demonización del Estado, a los que contribuyeron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como diversas asociaciones civiles pretendidamente críticas fueron corolario de esta campaña de implantación del nuevo pensamiento dominante. Se consumó así la renuncia expresa de nuestros gobernantes a la intención siquiera de reconocimiento de los derechos sociales básicos establecidos en la Carta Magna.

Así fue posible que, a partir de los años ochenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y luego el Partido Acción Nacional (PAN) coincidieran primero en la reducción, desmantelamiento, privatización o quiebra de las instituciones sociales, y luego, en su sustitución por un modelo que implicara la participación de las empresas privadas, y el cobro de cuotas para garantizar la accesibilidad de servicios básicos a la población.

LA SOCIEDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES: EL ESPACIO DE LA RESISTENCIA

El programa neoliberal, con todo, no resultó por completo exitoso, debido a la resistencia social que encontraron para su aplicación todas las medidas con que se pretendió imponerlo y consolidarlo. Sobre todo, el neoliberalismo puso en evidencia la inmensa brecha que existe en el país entre los más desprotegidos, éstos que –de acuerdo con cifras de los organismos financieros internacionales– viven con menos de un dólar al día; los mismos que, al migrar, envían anualmente quince mil millones de dólares a sus familias.

Cierto es que ese cuarenta por ciento de la población en la miseria, sumado a una prolongada parálisis económica no son prueba positiva alguna del éxito del programa neoliberal. Y más, si esa población, abandonada y rechazada por los globalifílicos funcionarios que se pasean por el mundo luciendo (entre otras cosas) lujosos atuendos adquiridos con recursos del erario público; si esa población negada tiene la capacidad de determinar cambios fundamentales en la orientación de las políticas gubernamentales. Lo cierto es que el recuento de daños, es decir, los golpes asestados a las instituciones públicas, las generaciones de

mexicanos sumidas en la miseria, el deterioro de la salud y la educación públicas, el crecimiento desenfrenado del autoempleo, entre otros, no es menor. México alimenta con su petróleo crudo la reserva petrolera norteamericana. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad sufren severas crisis administrativas y de gestión. En un país con más de seis millones de analfabetos y en que treinta y dos millones no completaron la educación básica, la educación superior privada se ha decuplicado, mientras que la pública disminuyó su aportación hasta un treinta por ciento del total nacional. Las pensiones de los trabajadores, entregadas a los bancos, sirvieron para pagar las deudas del Estado y alimentar programas gubernamentales. Los pueblos indígenas permanecen aislados y abandonados, y sus derechos no son reconocidos por las leyes.

HACIA UN PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN

Replantear la responsabilidad del Estado frente a la sociedad, como lo ha señalado López Obrador, es, por ello, un asunto de la mayor importancia. El bienestar de los mexicanos no puede ser dejado al arbitrio del mercado, ni puede depender de contribuciones adicionales de los más desprotegidos. Tiene que ser asumido de manera fundamental por las instituciones públicas creadas para ello, a las que debe reformarse y reorientar de manera que, en lugar de cobijar intereses de poder, complicidades e inercias, sirvan a los intereses generales del pueblo de México. Es necesario plantearlo de esa manera: *el objetivo central del gobierno debe ser garantizar el bienestar de los habitantes del país, atendiendo sus necesidades y demandas como la mayor prioridad, y establecer las condiciones para el respeto a la vida y la dignidad de todos, independientemente de su origen, condición social, género, situación económica o social, pueblo o comunidad de pertenencia, cultura, religión o ideología.*

La lucha contra la desigualdad y la injusticia sólo puede tener éxito si se establece como derecho, y se ejerce como responsabilidad de Estado el acceso a una vida digna, educación, salud, empleo, vivienda.

Por lo demás, tanto en los años neoliberales como durante los cuarenta años en que los gobiernos se ostentaron como posrevolucionarios sin

identificarse con alguno de los principios de la Revolución, los programas sociales han sido utilizados para controlar a la población, determinar sus preferencias electorales y evitar el desbordamiento de demandas insatisfechas. La que debiera haber sido una política de ejercicio de derechos sociales se convirtió en una forma de condicionamiento al que la población se resignaba: se inauguraban obras incompletas, para lucimiento del gobernador o del presidente municipal; se entregaban despensas, cemento, utensilios domésticos y hasta comidas a cambio de credenciales de elector, asistencia a mítines, votos en las urnas. Se ofrecían escuelas, caminos, centros de salud si y sólo si triunfaba el candidato oficial en elecciones que –de todos modos– siempre fueron fraudulentas.

El programa *Solidaridad*, iniciado por Salinas de Gortari, introdujo un nuevo ingrediente: la organización de las comunidades para llevar a cabo trabajos específicos demandados por el gobierno. Su objetivo era la constitución de redes sociales que tuvieran bajo su control a las comunidades, y en ellas, la conducción sería efectuada por las mujeres.

Oportunidades, la versión panista de esta forma perversa de programas sociales, deshizo las redes y estableció una forma de control individual a cada una de las personas “asistidas”: los niños que falten a la escuela tres veces por mes, pierden su derecho a la beca; las madres de familia que no acudan al menos una vez al mes a su centro de salud o clínica, pierden el derecho al servicio gratuito. Quienes no paguen su parte correspondiente a los servicios de salud serán excluidos del *Seguro Popular*, mientras que quienes no aporten en trabajo, especie o recursos no serán admitidos a los programas *Hábitat*. Y así sucesivamente. La política social convertida por el neoliberalismo en focalización, individualización, condicionamiento político. Nada más ajeno a lo que exige la Constitución.

Recuperar el sentido original del ejercicio de derechos sociales por los que lucharon Hidalgo y Morelos, Juárez, Villa y Zapata, Lázaro Cárdenas y cientos de miles de participantes en movimientos sociales y políticos por la justicia y la democracia a lo largo de la historia de México; lograr que los derechos sociales sean ejercidos de manera universal, libre y sin condicionamientos o cortapisas por todos los mexicanos, constituye la única solución aceptable a un agravio y falsificaciones de más de ochenta años.

La reactivación económica, con la reconstrucción de las industrias estratégicas, la producción agraria y la reorientación de las instituciones públicas dedicadas al servicio y bienestar de la población constituyen elementos indispensables para el cumplimiento de estos derechos de la población. Nuestro país no puede ser presa de políticos corruptos y empresarios inescrupulosos y voraces, para quienes no hay otro futuro que el que en el corto plazo les ofrece la especulación financiera, y a cambio de la cual sólo han engañado al pueblo de México.

Por eso, no pueden desligarse el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado con el fin de la corrupción, el control del gasto público, la austeridad republicana y el decoro y dignidad del servicio público. Como lo mostró la experiencia del gobierno del Distrito Federal a lo largo de los últimos cinco años, es posible cumplir con las demandas de la población, construir la universalidad y gratuidad de los programas sociales sin endeudar a la ciudad o al país. En la experiencia que vivimos, han podido ahorrarse recursos por cerca de veinte mil millones de pesos para cumplir con los programas sociales reconocidamente más avanzados del país. Se trata, entonces, no de hacer ahorros a costa de los más pobres, sino de reorientar el gasto y la inversión públicas, evitando derroches y dispendios, con la voluntad de entregar al pueblo de México lo que éste ha aportado para el desarrollo del país.

Enero de 2006